

El Estado de las luchas en Argentina¹

Maristella Svampa

Artículo publicado en "Etat des résistances dans le Sud - 2007" , Syllepse (Paris)- CETRI (Louvain-la-Neuve). Diciembre de 2006.

La Argentina actual presenta una faz paradójica. Por un lado, es un país muy movilizado, recorrido por un conjunto de acciones colectivas no institucionales caracterizadas por el anclaje territorial, la propensión a la acción directa no convencional y el desarrollo de estructuras participativas de carácter asambleario. Estas tres características abarcan una multiplicidad de organizaciones, que incluyen desde movimientos de desocupados (piqueteros), hoy muy estigmatizados, fábricas recuperadas y nuevas acciones sindicales, hasta asambleas multisectoriales en defensa del habitat, organizaciones campesinas e indígenas y acciones colectivas que reclaman contra la inseguridad. Por otro lado, el escenario político institucional muestra una hegemonía del partido gobernante (el Peronismo), visible en la fuerte concentración del poder en la figura presidencial de Néstor Kirchner (2003-), cuya contracara es el debilitamiento –en algunos casos, el colapso- de los restantes partidos políticos, así como la integración al gobierno de varias agrupaciones de desocupados y organismos de derechos humanos.

Esta situación paradójica, que señala procesos de confrontación y de cooperación con el partido en el gobierno, se inserta en un marco de recuperación económica y superávit fiscal, que se ha venido traduciendo por un retroceso de la desocupación (hoy del 11,4%) y, al mismo tiempo, por un ensanchamiento de las brechas

¹ Agradezco los comentarios de Pablo Bonaldi.

sociales (si en la década anterior, el 10% más rico ganaba 20 veces más que el 10% más pobre, en la actualidad lo supera 27 veces). Ciertamente es también que la acción del gobierno actual se vio favorecida por la emergencia de un espacio latinoamericano antineoliberal, en el cual comulgan diferentes gobiernos y movimientos sociales. Sin embargo, pese a que el escenario político presenta importantes modificaciones respecto del pasado reciente, sobre todo en lo que se refiere a la circulación de discursos políticos críticos, el modelo neoliberal –y el régimen de dominación política que acompañó su instalación– sigue gozando de buena salud.

En primer lugar, una de las notas más saltantes de los últimos tiempos ha sido entonces la institucionalización de diferentes organizaciones sociales y la incorporación al gobierno de numerosos dirigentes provenientes de las corrientes piqueteras vinculadas a la tradición nacional-popular, asociada al peronismo. La contracara de este fenómeno ha sido el disciplinamiento y demonización de las organizaciones de desocupados opositoras. En efecto, tras un discurso que afirmaba que el gobierno “no reprimiría”, la política se orientó hacia la estigmatización y judicialización de las organizaciones movilizadas. Esta campaña, realizada entre 2003 y 2005 con el apoyo de los grandes medios de comunicación y los sectores tradicionales de poder, desembocó en un consenso antipiquetero que hoy recorre la sociedad argentina. Los resultados fueron inequívocos: así, durante 2006, se registró una fuerte disminución de la presencia piquetera, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el proceso de estigmatización potenció la fragmentación del espacio militante.

Sin embargo, las luchas piqueteras se han extendido en los enclaves petroleros, controlados por las empresas multinacionales. A las dos regiones consideradas como la cuna del movimiento piquetero (Neuquén y el norte de Salta), en el último período se agregaría la provincia de Santa Cruz (Patagonia austral), donde durante años fuera gobernador el presidente Kirchner. Allí los conflictos con trabajadores del sector y con desocupados alcanzaron una gran intensidad entre 2004 y principios de 2006, que desembocaría en el encarcelamiento de piqueteros y delegados gremiales, así como en la militarización de la zona, a través del despliegue de tropas de gendarmería nacional, policías provinciales y grupos especiales. Finalmente, después de varias denuncias de violaciones de derechos humanos, el conflicto en Santa Cruz fue desactivado, a partir de la satisfacción del reclamo de los trabajadores petroleros y de la distribución de fondos de ayuda social a los desocupados. Como corolario, Kirchner también impulsó el reemplazo del gobernador de la provincia.

En segundo lugar, es necesario subrayar el aumento de los conflictos sindicales. Como era de esperar, la consolidación del liderazgo de Kirchner contribuyó al realineamiento del espacio sindical peronista, hegemonizado por la Confederación General del Trabajo (CGT), aquella que en los '90 convalidara las reformas neoliberales. También repercutió severamente en la orientación política de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), nacida en el '94 y reconocida por su carácter crítico y antineoliberal. En realidad, frente la reactivación de la tradición nacional-popular, la CTA -que renovará sus autoridades a fines de 2006-, atraviesa un período de

gran ambigüedad, acosada por las diferencias internas, que incluye varios dirigentes que adhieren a la política oficial.

Por otro lado, en 2005, los conflictos laborales se triplicaron respecto del año anterior (hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos). Aunque la mayoría de éstos han sido en demanda de una recomposición salarial, no son pocos los apuntan contra las consecuencias de la precariedad, buscando reducir las disparidades salariales entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los '90. Asimismo, no hay que olvidar que según datos oficiales, el trabajo no registrado aumentó notablemente en los últimos años, alcanzando el 44,3%, mientras que el costo laboral descendió un 30% respecto de 2001.

Los conflictos sindicales más resonantes fueron liderados por comisiones internas, en ciertos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas (que incluye la propia CTA). Entre ellos, se destacan los que se produjeron en el sector telefónico (empresas de call-center dependientes de Telefónica Argentina), transporte (subterráneos) y salud pública (hospitales). Todo ello llevó a que, en diciembre de 2005, se conformara un nuevo espacio de coordinación sindical, el Movimiento Intersindical Clasista, el cual reúne aquella izquierda basista con una clara afinidad con las organizaciones piqueteras independientes.

En tercer lugar, existe un importante movimiento de fábricas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, que continúan luchando por la vía judicial y legislativa a fin de obtener la ley de expropiación y el reconocimiento como cooperativas. En la

actualidad, hay aproximadamente 170 fábricas recuperadas, que involucran unos 12 mil trabajadores. A diferencia de la experiencia piquetera, desde el inicio las fábricas recuperadas concitaron una fuerte simpatía y apoyos sociales, que fueron fundamentales para su expansión y consolidación. Salvo casos excepcionales -entre ellos, cerámica Zanón -Fasinpat-, situada en la Patagonia y el céntrico Hotel Bauen, en Buenos Aires-, las fábricas recuperadas no encontraron una fuerte resistencia por parte del Estado, aun si la respuesta nunca fue homogénea. Antes bien, el Estado impulsó el acompañamiento de estos procesos, primero a través de una oficina del estado (el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social); luego, facilitando la formación de cooperativas, la expropiación definitiva y la cesión temporaria (2 años) en favor de los trabajadores. En la actualidad, las fábricas recuperadas se hallan en una etapa de franca institucionalización, aún si sus obstáculos mayores remiten tanto a la falta de apoyo del Estado en el proceso de comercialización de los productos, como a la fragmentación organizacional que presenta el espacio que núcleo estas experiencias. De las cuatro corrientes existentes, dos de las más importantes poseen aceitados vínculos con el gobierno actual y sus principales dirigentes se definen como oficialistas.

En otro orden, el aumento de la inseguridad se ha venido manifestando de diferentes formas y en diversos niveles, a través de la evidente falta de control y regulación estatal y la consiguiente desprotección de los ciudadanos. Uno de los hechos que conmovió el país fue la muerte de 194 jóvenes a causa de un incendio ocurrido en una discoteque (Cromagnon) en la ciudad de Buenos

Aires. Aunque el local tenía capacidad para 1.200 personas, en el momento del siniestro –diciembre de 2004- había más de 4.000. Rápidamente se comprobaría que las condiciones de funcionamiento del local eran inaceptables desde todo punto de vista, con lo cual la llamada “masacre de Cromagnon” se constituyó en la trágica ilustración de un modelo socio-económico excluyente, dejando a la vista la precariedad en lo que se refiere al cuidado de la vida de los más jóvenes por parte de las autoridades responsables. Desde un comienzo, los familiares y sobrevivientes de esta tragedia se organizaron, exigiendo que la justicia actuara sobre los responsables directos e indirectos. La presión de los familiares de las víctimas, así como las investigaciones efectuadas, terminaron con la carrera del Aníbal Ibarra, el jefe gobierno de la capital del país, quien fue destituido por la vía institucional por “mal desempeño de sus funciones” en marzo de 2006.

Otro de los hechos más relevantes ha sido la emergencia de reclamos ambientales. Al igual que en otros países latinoamericanos, estas movilizaciones colocan el acento en la defensa del hábitat, la protección de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables, frente al avance de las empresas trasnacionales. Así, se han venido desarrollando acciones en varias regiones del país, que cuestionan las formas que reviste la expansión de la frontera minera, basadas en el desarrollo de la minería tóxica (explosiones a cielo abierto y tratamiento con cianuro). En sintonía con el proceso de politización abierto en 2002, así como con los levantamientos comunitarios registrados en los 90, ligados a la crisis y desmantelamiento de las economías regionales, dichas acciones

asumen un carácter multisectorial y adoptan formas de participación asamblearias (asambleas de auto-convocados).

El conflicto ambiental de mayor impacto político nacional e internacional es el reclamo de los vecinos de Gualaguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en contra de la instalación de empresas papeleras concedidas por el gobierno uruguayo. Los vecinos autoconvocados comenzaron sus reclamos denunciando el peligro de contaminación, producto del "efecto de acumulación" que se derivaría de la instalación de dos grandes empresas papeleras del lado uruguayo del río. Al no encontrar respuesta, éstos echaron mano a la acción directa, realizando largos cortes de los pasos fronterizos internacionales, entre 2005 y 2006. El reclamo de los vecinos (denominados "neopiqueteros" por un sector de la prensa, por la utilización del corte o piquete), fue apoyado por el gobierno nacional. Muy probablemente el objetivo del gobierno era capitalizar una importante movilización social, que aparentaba no tener costos políticos internos. Sin embargo, el conflicto fue asumiendo una gran complejidad y un carácter incierto, pues a la confrontación entre actores locales y actores globales, se le sumó la compulsión político-diplomática entre Argentina y Uruguay. Así, dicho conflicto tendió a adoptar un lenguaje nacionalista, tensando sobremanera las relaciones entre ambos gobiernos. Durante 2006, la controversia desembocó en dos querellas: una, presentada por la Argentina ante la Corte internacional de la Haya, centrada en la cuestión de la contaminación ambiental, se decidió en favor del Uruguay. La segunda es la causa abierta en el tribunal Arbitral de Controversias del MERCOSUR, donde Uruguay denuncia "la omisión del Estado

argentino en adoptar medidas apropiadas" frente a los cortes de los puentes fronterizos y demanda por ello un resarcimiento económico. Sorpresivamente, en esta segunda querrela, el gobierno argentino asumió una defensa de los assembleístas de Gualeguaychú, subrayando la jerarquía de la "libertad de expresión", por sobre la "libertad de circulación", desarrollando así una línea de argumentación que contrasta con la posición gubernamental respecto de los cortes de ruta y de calle que han venido realizando otras organizaciones (en especial, los desocupados), resueltas a favor de un proceso de criminalización de la protesta. Así, desde 1997 a la actualidad, existen unos 4.000 procesamientos judiciales, muchos de ellos, por participar en cortes de ruta. Más aún, bajo el gobierno de Kirchner se registró una profundización de la judicialización del conflicto social, que ha llevado a la cárcel y juicio oral a diferentes manifestantes y activistas.

Por último, no hay que olvidar que estas luchas y procesos se desarrollan en un espacio latinoamericano atravesado por la crítica al neoliberalismo y por la búsqueda de alianzas continentales. En este sentido, el actual gobierno argentino ha sabido explotar la nueva coyuntura latinoamericana. Este escenario continental, reforzado por la última cumbre del MERCOSUR realizada en Córdoba (julio 2006), que incluyó el ingreso de Venezuela, divide el campo militante, al tiempo que produce no pocas tensiones y ambivalencias al interior de los movimientos sociales opositores a Kirchner, así como un gran entusiasmo en las filas oficialistas. En este contexto, la cuestión acerca del alcance político del gobierno de Kirchner deviene central, si pensamos que casi todas las organizaciones y

movimientos sociales consideran que los desafíos por venir se jugarán en este nuevo espacio, sobre todo si el MERCOSUR adopta una dimensión más político-económica.

* * *

No pocas formas de auto-organización de lo social -que incluye varias organizaciones piqueteras y organismos históricos de derechos humanos- se han institucionalizado e integran hoy el elenco gubernamental. Sin duda, habrá que esperar un tiempo para evaluar hasta donde la opción por la institucionalización se traduce o no en la ampliación de esferas de participación ciudadana. Por lo pronto, los avances se refieren sobre todo a la "política de la memoria", esto es, la condena de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. El correlato de este proceso es que las organizaciones no sólo resignan su autonomía e impulsan fervorosamente la desmovilización, sino que tienden a desarrollar un vínculo de subordinación y dependencia político con el líder (Kirchner), propio de la tradición peronista.

Sin embargo, la existencia de un conjunto de organizaciones oficialistas no debe hacernos olvidar la persistencia de un sólido arco de organizaciones sociales anticapitalistas, críticas del gobierno actual, bien insertas en redes nacionales y globales. Por último, la capacidad de absorción del partido en el poder tampoco puede ocultar la permanente emergencia de nuevos reclamos, los cuales asumen indefectiblemente la acción directa y la organización

asamblaría como forma de expresión, desbordando así los frágiles canales institucionales.

En fin, ambigüedades, tensiones y dobles discursos recorren los discursos y prácticas actuales, en un horizonte abierto a nuevas dinámicas y desafíos, que estará muy marcado por las nuevas formas de movilización social, en un contexto de fuerte hegemonía política del peronismo.